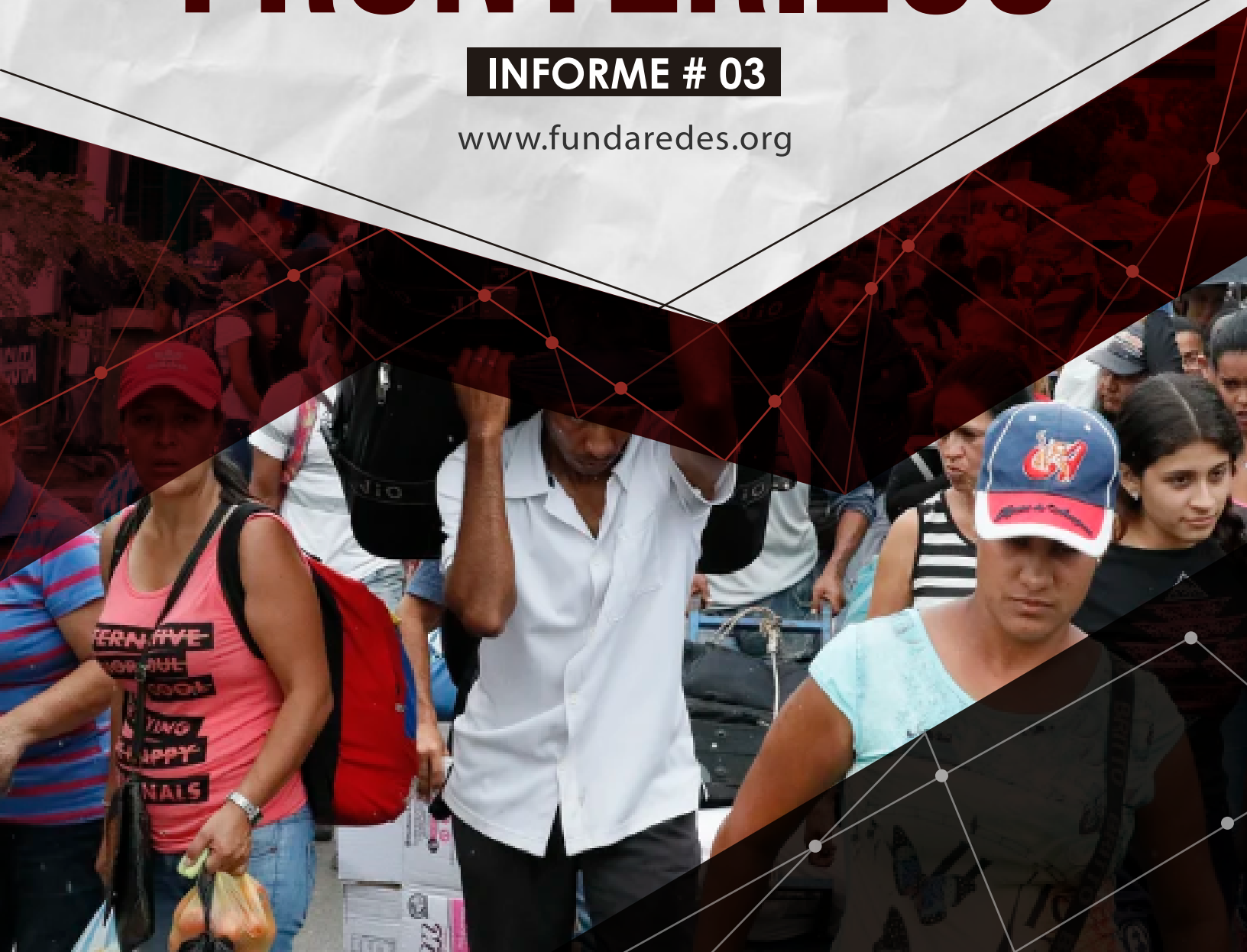
FUNDA REDES

13 OCTUBRE 2022

INDICADORES FRONTERIZOS

INFORME # 03

www.fundaredes.org



ANÁLISIS DEL CONTEXTO FRONTERIZO

SEPTIEMBRE

Durante el mes de septiembre, se mantuvo la actuación de los grupos armados irregulares y bandas delictivas en las zonas fronterizas del territorio venezolanos y regiones circundantes a las mismas, evidenciando una vez más el incumplimiento del Estado venezolano en su deber de garantizar la protección y seguridad a la ciudadanía. El trabajo de documentación de la organización concluyó que comparado con el mes inmediatamente anterior se registra un aumento del 183% de enfrentamientos armados.



Foto: Agencia AFP

Bandas delictivas en las zonas fronterizas del territorio venezolanos

LA MINERÍA ILEGAL SIGUE DESATANDO SUFRIMIENTO EN LOS MÁS VULNERABLES

En el estado Bolívar durante el mes de septiembre hubo quince (15) homicidios, de los cuales ocho (8) fueron cometidos en el municipio Caroní, en donde las pugnas entre los grupos armados irregulares y otros cuerpos armados persisten por el control de las minas y yacimientos de oro. Por su parte, en el estado Amazonas la situación de los pueblos originarios se agrava cada día producto de un cúmulo de arbitrariedades como la ocupación de sus territorios, la violencia criminal contra las poblaciones y la destrucción de los ecosistemas por factores asociados a la minería ilegal de oro, coltán y diamante, en manos de grupos violentos con la complicidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para lo cual indígenas son forzados a trabajar en situaciones de esclavitud o explotación, tanto laboral como sexual.

De este modo, las zonas mineras del estado Amazonas se han convertido en un foco de frecuentes desapariciones y asesinatos, donde la mayoría de pobladores pertenecen a etnias indígenas. En relación a la cifra de asesinatos se documentó a través de un boletín difundido la tarde del lunes 12 de septiembre por parte de la ONG Kapé, que los cadáveres de dos (2) indígenas fueron hallados en dos lugares distintos de la entidad. Las circunstancias de las muertes no están del todo claras, pero la organización presume que fueron asesinados.

El primer hallazgo ocurrió el martes 6 de septiembre. El cuerpo corresponde a Pablo Guzamana, un profesor de 56 años que trabajaba en las aldeas del pueblo Baniva. El cadáver estaba en el puerto fluvial de San Fernando de Atabapo, el lugar donde Guzamana laboraba de noche para obtener ingresos extras, ya que su oficio como docente no le generaba suficiente dinero para sustentar a su familia. Kapé Kapé dijo que la causa de muerte no fue precisada, debido a que no le fue hecha la autopsia de ley; a raíz de que en el poblado no hay medicatura forense. El segundo caso se trata de un joven jugador de fútbol de la etnia uwottuja, identificado como Euclides Arana Padrón, de 21 años. Llevaba siete días desaparecido y fue hallado amordazado a orillas del río Orinoco.

Todo lo anterior evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas, constituyéndose además como una población con un porcentaje significativo de inseguridad alimentaria, debido a que constantemente es desalojada de sus tierras por parte de grupos armados irregulares.

Parte de esta realidad, la reflejan los más de 300 waraos, que se encuentran en condición de calle, cifra que se ha incrementado en las primeras semanas del mes de septiembre, donde se han documentado familias enteras deambulando por los ciudades del oriente del país en búsqueda de comida y sustento, asimismo jóvenes waraos se han visto en la obligación de dejar sus tierras y emigrar hacia Trinidad y Tobago, según cálculos, 8 de cada 10 jóvenes parten, en búsqueda de mejores condiciones de vida para ellos y la de su familia.



300 waraos, que se encuentran en condición de calle

INICIÓ EL AÑO ESCOLAR EN MEDIO DE CALAMIDADES Y LA NEGLIGENCIA DEL ESTADO

El año escolar en las zonas fronterizas del país inició en medio de irregularidades caracterizadas por el mal estado de las unidades educativas, la crisis salarial en profesores y maestros que además intentó ser mitigada con una humillante oferta del Estado venezolano asociada a la posibilidad de adquirir zapatos a bajo costo y la incapacidad de las familias para dotar a sus hijos de los útiles escolares.

En el estado Zulia, la deserción docente y estudiantil sigue verificándose en el transcurso de este año 2022; de acuerdo a Codhez (Comisión para los derechos humanos del estado Zulia) distintas instituciones de la región zuliana reportaron la pérdida de hasta un 30% de su personal por los bajos salarios y la insuficiencia de ingresos para subsistir. En este contexto, el estado Zulia se ubica como uno de los estados que presenta mayor riesgo de deserción estudiantil.

Asimismo, la infraestructura escolar interfiere en la calidad educativa, debido a que se encuentra en ruinas y la gran mayoría no cuenta con servicios básicos como la electricidad y el servicio de internet, además de la ausencia del Programa de Alimentación Escolar (PAE). De acuerdo a la ONG local, esta situación se evidencia con mayor ahínco en el municipio Guajira, puesto que en el eje foráneo de Sinamaica hay siete escuelas de educación básica y todas están en estado de abandono.



Escuela U.E.E Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

En el estado Táchira, pese a que el Estado ha desarrollado una abrumadora propaganda mediática sobre supuestas mejoras en el sistema educativo del país, más del 60% de las instituciones educativas, que cuentan con más de 50 años de fundados, presentan condiciones deplorables en su infraestructura. Gran parte de los planteles de la región presentan deterioros de vieja data, debido a la falta de previsión y mantenimiento preventivo, dijo Gustavo Velasco, secretario del Colegio de Licenciados en Educación, seccional Táchira. "No hay peores condiciones para iniciar el periodo escolar como las de este año", manifestó.

Por su parte, padres y representantes esperan como parte de la reapertura gradual de la frontera entre

Colombia y Venezuela, que nuevamente se permita el paso a Venezuela de las 38 unidades escolares que diariamente trasladaban a más de 4.430 niños que residen en municipios fronterizos venezolanos y estudian en escuelas y colegios de Colombia. Hasta los momentos no ha existido algún pronunciamiento por ninguna de las autoridades de ambos países

En Upata, estado Bolívar no todos los representantes podrán comprar la lista de útiles del próximo año escolar 2022-2023, motivado al alza de sus precios. Padres y representantes en el municipio Piar manifestaron su preocupación y asombro ante el alto costo de los útiles escolares, al punto que, muchos de ellos se ven en la obligación de comprar en menor cantidad y así tratar de cubrir lo que sus hijos realmente necesitan. Josefina de Espejo, habitante del sector, manifestó: "este año será difícil para mí comprarle la lista a tres hijos menores que irán a la escuela, no cuento con un trabajo y dependo del salario mínimo de mi esposo, y esto alcanza para medio alimentarnos".

En Sucre unos 1.370 planteles educativos se encuentran en riesgo frente a la indiferencia del Estado y los riesgos de frecuentes movimientos telúricos que caracterizan a la entidad. En la actualidad existen recintos educativos que están inhabilitados desde hace más de 25 años por presentar daños estructurales, provocados por movimientos telúricos, que no han sido solucionados; complicando así el retorno a clases.

EL MEDIO AMBIENTE BAJO ASECHO

El territorio venezolano se encuentra minado de malas prácticas medioambientales que comprometen la sostenibilidad de nuestros ecosistemas y la salud de la población, siendo septiembre un mes no exento de sucesos asociados a esta materia:

Una fuga de alúmina calcinada de la empresa Bauxilum, estado Bolívar ha ocasionado graves daños de salud y ambientales para los habitantes de dicha zona, asimismo durante el mes continuaron los derrames de petróleo en el Sector Barbacoas II, carretera nacional, km 27, del estado Anzoátegui, afectando sembradíos y manteniendo contaminados los ríos Guanipa y Kashama, de la localidad.

Asimismo, la tala indiscriminada de árboles en el municipio Michelena del estado Táchira, continúa bajo la complicidad del Estado venezolano junto con grupos armados irregulares. Los habitantes denuncian que a pocos metros de donde está ocurriendo la tala de árboles, pasa un afluente hídrico, generando erosión del suelo y alterando la calidad del agua.

Por otra parte, un incendio de gran magnitud registrado en el estado Anzoátegui en la refinería de Guaraguao, en Puerto La Cruz; causo alerta y conmoción en los ciudadanos quienes comentaron que debido a la falta de protocolos de seguridad para la protección de la refinería continúa sucediendo este tipo de eventos, siendo este el segundo incidente del mes, que se reporta en uno de los establecimientos de la estatal PDVSA

ESCENARIOS:

- La renovación de la Misión de Investigación de Hechos de las Naciones Unidas para Venezuela, en los primeros días de octubre, por parte del Consejo de Derechos Humanos; permite a la sociedad civil seguir contando con un espacio de visibilización y denuncia sobre las violaciones de derechos humanos que se cometen en Venezuela, incluyendo las que se llevan a cabo en la zona del Arco Minero por la incursión de grupos armados irregulares y bandas delictivas las cuales llevan a cabo actividades relacionadas a la minería ilegal. Los aportes de FundaRedes a esta misión, le ha permitido incluir esta realidad dentro de su más reciente informe: "Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela: La situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar" divulgado el 22 de septiembre de 2022[1]

- Tras la reunión sostenida el pasado 04 de octubre de 2022 entre el Estado colombiano y dirigentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano, con la cual se dio inicio al proceso de diálogo entre dichos actores bajo la actuación del Estado venezolano como "garante de paz", se desvirtúa la esencia de este último rol dentro de procesos que buscan promover de forma institucional una solución a un conflicto histórico, bajo parámetros de verdad, reparación y garantías de no repetición, tomando en cuenta que:

    - El Ejército de Liberación Nacional también se encuentra presente en territorio venezolano bajo la complicidad y silencio de las autoridades venezolana.

    - Aunque el conflicto entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, tiene sus raíces en territorio colombiano; actualmente el accionar de este grupo armado irregular también impacta directamente en la calidad de vida de poblaciones y comunidades vulnerables habitantes del lado fronterizo del territorio venezolano e incluso otras regiones del territorio nacional, violando de esta manera sus derechos humanos y garantías consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la integridad del territorio, exponiendo a su vez sus recursos naturales, biodiversidad y actividades económicas al convertirlo en un centro de operaciones para el crimen organizado.

    - Las autoridades venezolanas han reaccionado con persecución, hostigamiento y detención arbitraria contra activistas y defensores de derechos humanos como Javier Tarazona, director de FundaRedes, cuando estos han denunciado la complicidad de funcionarios y políticos afines al partido de gobierno; rechazando la posibilidad de promover investigaciones transparentes que conlleven a la implementación de políticas que permitan la expulsión de células de grupos armados irregulares dentro del territorio nacional

    - Distinto a ser "garante de paz" el Estado venezolano debería asumir dentro de esta negociación, su rol como parte afectada e interesada en que su territorio no siga siendo santuario de disidencias de los grupos armados irregulares, tal como sucedió con las negociaciones entre Colombia y las FARC, los cuales comprometen la integridad del territorio, sus recursos minerales y naturales.

- La conflictividad política, sindical y social en el país persiste en medio de una crisis económica que compromete la posibilidad de satisfacer sus necesidades a los trabajadores y sectores más vulnerables de la población. Asimismo, la falta de consensos en los sectores democráticos de cara a una candidatura unitaria para las elecciones presidenciales, profundizan la desesperanza entre la

1 Ver informe en español en:
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/ffmv/2022-09-20/FFMV-CRP-2-Spanish.docx

población quien cada vez más pierde interés en los asuntos públicos y se enfoca única y exclusivamente en subsistir ya bien sea migrando a otras latitudes o buscando oportunidades de ingresos sin importar su procedencia o riesgos que las involucren.

- El Estado, aprovechando la falta de consensos en la oposición venezolana y siendo a su vez generador de la atomización de la misma con la incautación de tarjetas de partidos políticos, inhabilitaciones política y la puesta en marcha de estrategias basadas en posicionar actores políticos vinculados al Estado, que dicen ser de oposición; también ha asomado la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales pretendiendo repetir lo sucedido en 2018 cuando las mismas se celebraron en mayo en vez de diciembre de aquel año, desarticulando así a los sectores democráticos.